

CAPÍTULO III

LOS GOBIERNOS RADICALES

Desde el último cuarto del siglo XIX se ha ido estructurando y consolidando en la Argentina —como se vio— el régimen oligárquico, alianza de intereses entre los grupos superiores de terratenientes, comerciantes, financieros, dirigentes políticos y militares y el capital extranjero, primordialmente británico. La alianza controla los más importantes sectores y resortes de la economía nacional; confiere a ésta sus caracteres de subordinación y especialización deformante; detenta una situación de monopolio en la vida social, cultural y política; cierra el camino del poder a toda clase, grupo o partido que no se identifique con el juego oligárquico-imperialista.

Este proceso vulnera diversos intereses y multiplica los descontentos y las resistencias de muy distintos orígenes clasista, sectoriales y regionales, sobre todo los siguientes:

i) Terratenientes y comerciantes grandes y medianos desplazados de los círculos oligárquicos centrales; grupos afectados por un descenso que determinan las vicisitudes económicas y políticas y su propia inadecuación a nuevas condiciones; grupos beneficiados por el crecimiento económico, pero marginados de las posiciones superiores de *status*, prestigio y poder.

ii) Nuevas capas medias, rurales y urbanas, creadas o expandidas por el crecimiento dependiente, en las que se fundan el tronco criollo y el aporte inmigratorio: pequeños comerciantes, artesanos, empresarios de servicios; burguesía manufacturera (Buenos Aires, La Plata, Rosario y otras ciudades); profesionales liberales, intelectuales, estudiantes; empleados públicos y privados; militares.

iii) Pequeños y medianos estancieros, chacareros, arrendatarios y colonos.

iv) Trabajadores urbanos, peones de estancia y de charca.

v) Hijos de inmigrantes, de primera y segunda generación argentina, que buscan su plena asimilación y su participación irrestricta en la vida nacional.

vi) Sectores y grupos regionales y provinciales, del litoral y de la

Desde el punto de vista negativo, el frente opositor a la oligarquía es heterogéneo, y los sectores y grupos que lo componen se benefician con la prosperidad determinada hasta entonces por el crecimiento dependiente, y sienten que el progreso económico es posible y probable. Coinciden, por tanto, en un consenso favorable hacia el sistema y en una indiferencia ante todo lo que pueda implicar cambios estructurales. Sus aspiraciones tienden a las reformas moderadas, de sentido igualitario y redistribuidor, favorables al ascenso, al enriquecimiento y a la seguridad. Ello es obvio en los grupos terratenientes y mercantiles y en la pequeña burguesía dependiente y burocrática. En cuanto a la burguesía manufacturera, es incipiente, débil, compuesta sobre todo por extranjeros no integrados, aislada y hostilizada por las clases altas, las capas medias y los trabajadores, incapaz de articularse orgánicamente, de formular un programa propio y alternativo de desarrollo y de pretender un liderazgo sobre otros grupos. El proletariado es de formación reciente, minoritario, aislado, con fuerte predominio de extranjeros, carente de ideología coherente, de programa realista y de dirección unificada y eficaz. Su acción enfatiza más las reivindicaciones económicas que las políticas. Su agitación, sin embargo, tiende a intensificarse, y gana la simpatía de políticos e intelectuales de capas medias que se solidarizan con aquéllas y las convierten en elemento crítico de la oligarquía. El campesinado, sobre todo sus sectores de arrendatarios y colonos, pasa por periodos de agitación y lucha, reducidas empero a la satisfacción de aspiraciones vinculadas con la rebaja de arrendamientos y costos, la mejora de precios y su pago en oro, las mayores posibilidades de acceso a la tierra. El campesinado acata la legalidad básica del sistema, y su agitación no cristaliza en programas de reforma agraria, y desemboca en actitudes políticas de indiferencia y conservatismo.

Desde el punto de vista positivo, las clases y grupos que se analizan coinciden en exigir la liquidación de la marginalidad y la extensión de la participación política, en distinto grado según los grupos: como electores, por parte de las masas populares; como electores y como funcionarios gubernamentales, las capas medias; como titulares de altos cargos políticos y administrativos y como usufructuarios de los resortes de poder económico y social, las capas altas desplazadas y postergadas. La exigencia de participación ampliada puede incorporar en su dinámica, con las limitaciones señaladas, algunas formulaciones críticas sobre la estructura y funcionamiento del sistema y sobre sus deformaciones y corruptela.

zona pampeana (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos), y de centros urbanos del interior, recientemente incorporados al proceso de expansión y de modernización, con nuevo sentido de pertenencia y lealtad nacionales, y deseos de una mayor injerencia en las decisiones políticas y económicas.

Estos sectores en confluencia, diferentes por su origen, su situación socioeconómica, sus motivaciones y perspectivas, presentan una doble coincidencia básica, negativa una y positiva la otra.

La *Unión Cívica Radical* expresa, aglutina y canaliza la protesta antioligárquica y antiimperialista de todos los sectores y elementos vulnerados y desplazados por el régimen, y las tensiones y conflictos que no halla salida a través de los mecanismos y canales tradicionales. De su carácter policlasista provienen las características fundamentales del radicalismo, su fuerza y sus limitaciones. Ante todo, la heterogénea composición social, que exige la percepción, la expresión y la satisfacción de las necesidades y tendencias de todos los grupos que pretende representar, y que impide y desaconseja, por consiguiente, las definiciones demasiado concretas y tajantes. Ello trae a su vez necesariamente aparejadas la ambigüedad ideológica y la indigencia programática.

La *ideología* del radicalismo se configura a la vez como expresión de sus bases sociales y como reacción contra sus enemigos y competidores. Combina elementos políticos, místicos, metafísicos y morales. Enfatiza las nociones de la democracia política liberal, sobre todo la necesidad de volver vigente la soberanía popular, el nacionalismo y el papel predominante del Estado. El nacionalismo radical refleja los avances en la integración y en la centralización del país y del sistema político-institucional, la presencia incrementada de diversas clases y grupos regionales, la reacción contra el espíritu dependiente y cosmopolita de la oligarquía y contra la penetración imperialista y la difusión en casi todos los estratos sociales de una xenofobia antiinmigratoria. El Estado es visualizado como encarnación del pueblo y de la nacionalidad y como aparato autónomo de las clases, respecto de las cuales debe operar como árbitro superior. Por reacción contra la oligarquía conservadora, el radicalismo rechaza muchos de sus valores y de sus elementos programáticos. Valora la tradición y subestima la modernización. Se muestra indiferente a los problemas del crecimiento económico, actitud reforzada por la falta o la debilidad de agentes dinámicos de transformación en el país y en el propio

radicalismo. Reivindica el catolicismo y se muestra hostil a la laicización. Subvalora o rechaza todo lo foráneo y los elementos y pautas que provienen del exterior. En competencia con las corrientes anarquistas y socialistas, desconfía del sindicalismo obrero y se despreocupa relativamente de los problemas y derechos sociales.

El *programa* del radicalismo constituye la continuidad y propugna la realización efectiva del proceso democrático-burgués a la vez iniciado y limitado por la oligarquía. Se propone la democratización del Estado, aunque sin modificaciones estructurales. El poder político debe expresar la voluntad popular. El sistema institucional debe ser respetado, a través del cumplimiento de la constitución nacional y de la intauración del sufragio universal, libre, secreto y puro. Las reivindicaciones democráticas del radicalismo incluyen también la honestidad administrativa y la moralidad pública, como repudio al materialismo y sensualismo de la oligarquía (corrupción, especulación, negociados, consumo conspicuo) y como legitimación de la propia pretensión al poder. Las autonomías provinciales y municipales deben ser respetadas y protegidas del centralismo impuesto por la oligarquía, satisfaciéndose con esta formulación, a la vez, las exigencias de los sectores regionales y populares y los requisitos de una auténtica formulación de la voluntad popular en todos sus niveles.

El programa radical mantiene la indefinición ante los problemas del desarrollo nacional, carencia explicable en un partido que expresa a clases y grupos que otorgan su consenso al sistema vigente y a las que la prosperidad lleva a poner el énfasis más en la redistribución de la riqueza existente que en la producción de riqueza nueva.

A falta de voluntad para atacar de raíz los problemas esenciales de la sociedad argentina, de ideología definida y de posturas y soluciones concretas, la mística partidaria y el personalismo caudillesco deben operar como aglutinantes de un movimiento perpetuamente amenazado por contradicciones y desgarramientos interiores. El radicalismo es presentado no como un partido más, sino como un movimiento que conjuga a la mayoría de los grupos nacionales, pero situado por encima de clases e intereses particulares, encarnación y realización de la nacionalidad misma. Su acción política aparece como cruzada de la «causa» contra el «régimen», a cuyo frente se coloca Hipólito Yrigoyen, apóstol de rasgos casi sobrenaturales. Dotado el radicalismo de virtudes inmanentes, su llegada al poder implicaría necesariamente el comienzo de la «reparación», es decir, la superación total de la viciosa estructura creada y mantenida por la oligarquía.

De estas características se deduce necesariamente la imposibilidad de que el radicalismo cumpla una tarea de transformación profunda. En su seno y en su dirección pesan demasiados sectores conservadores y vacilantes, sobre los cuales se ejercerán siempre las presiones reaccionarias y que determinan algunos rasgos esenciales de su fisonomía y de su acción política: limitación estratégica, empirismo de corto alcance, temor y desconfianza hacia la movilización de masas populares; tendencia a la adaptación a las fuerzas y estructuras sociales dominantes y a la reforma superficial.

Pese a sus contradicciones e insuficiencias —o quizá a causa de ellas—, durante varios lustros el radicalismo puja persistentemente hacia el poder y, finalmente, lo alcanza. Partido clásico o movimiento de características especiales, se organiza sobre bases y con estructuras y alcances ampliamente populares y nacionales, aunque ello sufra las limitaciones provenientes del policlasismo, del predominio de grupos sociales superiores y de las condiciones de clandestinidad y conspiración. Se va convirtiendo así en la fuerza política más representativa, poderosa e influyente. Relega a posición secundaria a otros partidos opositores, el Socialista y el Demócrata Progresista, limitados por su restringida base social y regional, por su carácter elitista y por el sentido de modernización europeizante que impregna sus ideologías, programas y modos de actuación. El radicalismo proclama la intransigencia frente a las reglas del juego político creadas por la oligarquía y recurre a la crítica permanente del régimen, al rechazo de todo acuerdo, a la abstención electoral y a la insurrección armada (1890, 1893 y 1905).

La acción política del radicalismo surge del desarrollo capitalista dependiente de sus progresos y de sus contradicciones pero se transforma en la expresión y en la afirmación de cambios y tendencias que capta y formula mejor que nadie. Resultado y parte de las transformaciones cumplidas por el régimen oligárquico, agrega lo que éste no quiere ni puede cumplir, el objetivo de una participación ampliada que extienda y refuerce las bases sociales y políticas del propio régimen. El radicalismo va ganando así el apoyo, la simpatía o la neutralidad expectante de grupos superiores, de las capas medias, de sectores campesinos y obreros, de funcionarios públicos y militares. Congrega a la mayoría de las fuerzas sociales en un gran movimiento político que aísla a la oligarquía, la debilita y termina por forzarla al alejamiento del poder gubernamental.

El triunfo del radicalismo termina por parecer inevitable a sus propios enemigos, e incluso se llega a aceptar tal perspectiva como medio de encauzar dentro del poder tradicional una marea social y política en ascenso que, de otro modo, podría desencadenar convulsiones revolucionarias de imprevisibles consecuencias, posibilidad que el caso mexicano revela significativamente. La oligarquía comienza a sentirse cuestionada y aislada dentro del país, al tiempo que se descompone, se debilita y escinde interiormente, pierde confianza en sí misma. Su configuración y su actuación como *élite* aristocrática, su rigidez y soberbia frente a las reivindicaciones y presiones ascendentes de sus sectores desplazados y de las capas medias y populares, sus abusos y despliegues de inmoralidad y corrupción, minan su prestigio, su autoridad y el consenso relativo de que gozara hasta entonces. El crecimiento económico no sigue progresando con el mismo ritmo sostenido. Los grupos que controlan las relaciones económicas externas le otorgan condiciones menos favorables de comercialización. Los precios de exportación y los términos del intercambio se deterioran, y con ellos la renta de la tierra. Las actividades ganaderas caen bajo el creciente dominio de los frigoríficos extranjeros. Sectores de la oligarquía comienzan a manifestar su inquietud ante la relación de dependencia y sus efectos negativos, y ven en un mayor grado de nacionalismo el modo de negociar en mejores condiciones con las fuerzas externas. En el seno de la clase dominante aparecen conflictos internos que la debilitan y desprestigian, y en virtud de los cuales las facciones buscan no infrecuentemente el apoyo radical contra las rivales. El imperialismo inglés dominante en el país percibe el debilitamiento de la oligarquía, el ascenso del radicalismo, la necesidad de un gobierno consolidado sobre bases políticas más amplias, que preserve la continuidad legal y las estructuras básicas del sistema, frene la creciente irrupción de Estados Unidos y enfrente los problemas emergentes del ya previsible conflicto con Alemania.

Algunos grupos representantes de la oligarquía, perceptivos y oportunistas, captan la esencia de la cuestión. La heterogénea composición social del radicalismo, la existencia en su seno de sectores afines a los grupos gobernantes y de capas medias proclives al conformismo y al compromiso, las exigencias puramente formales de los dirigentes partidarios, el abandono de la insurgencia desde 1905: todo ello convence a los dirigentes más lúcidos del patriciado (Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña) de que una transacción política mutuamente provechosa con el principal partido opositor es no sólo necesaria, sino también

posible. Un primer intento busca el acuerdo entre la oligarquía y el radicalismo, que divida y desgaste al segundo y amplíe y refuerce las bases de la primera. La intensidad de la inquietud popular y la intransigencia de Hipólito Yrigoyen hacen fracasar la política del acuerdo formal y obligan a reemplazar por la retirada estratégica. La oligarquía abandona el gobierno político, conserva intactos sus privilegios y fuentes de poder socioeconómicos, somete al radicalismo al desgaste de la responsabilidad estatal, descarga sobre él las tareas de reajuste y de freno y represión de los grupos más inquietos y amenazantes y gana tiempo hasta que las circunstancias le permitan recuperar el terreno abandonado.

Este proceso culmina con la reforma electoral de 1912, a partir de la cual se inician los triunfos radicales, que, pasando por la conquista de bancas parlamentarias y municipales y de gobiernos provinciales, colocan en 1916 a Hipólito Yrigoyen en la Presidencia de la República.

La llegada del radicalismo al gobierno constituye un considerable progreso. Refleja el ascenso y el fortalecimiento de nuevos grupos sociales, especialmente las capas medias criollo-inmigratorias apoyadas y presionadas por sectores populares y obreros a los que se utiliza políticamente. Extiende la participación política. (El porcentaje de la población masculina adulta con derechos electorales sube del 20 al 60 por 100 entre 1912 y 1916.) En la misma medida, constituye una derrota política de la oligarquía, y ello, unido a las dislocaciones provocadas por la guerra y sus secuelas, atenúa parcial y transitoriamente la eficacia de la dominación imperialista.

Por otra parte, desde el momento mismo de su llegada al poder, el radicalismo desnuda las limitaciones fundamentales que frustrarán su acción renovadora. La relación de fuerzas se ha ido modificando, como se vio, en contra de la oligarquía, que ha perdido confianza en sí misma y en su derecho divino al poder y se ha desacreditado ante la opinión pública y ante las masas populares. Una mayoría significativa vota al radicalismo y recibe su triunfo con entusiasmo delirante. Sectores importantes que no han sufragado por el nuevo gobierno adoptan, no obstante, hacia él una actitud de neutralidad benevolente. La mayoría del pueblo argentino espera en 1916 la «reparación» prometida en lustros de abstención e insurgencia, y hubiera aprobado y sostenido una depuración revolucionaria de los elementos oligárquicos atrincherados en el Congreso, la Administración y la justicia, e implicados en los delitos y corrupciones del régimen.

El radicalismo se ve frenado en 1916 por sus escrúpulos constitucionales, por el temor a un contragolpe oligárquico, por la resistencia de los elementos radicales anteriormente incorporados a funciones parlamentarias y ejecutivas y por el temor a la movilización popular. No cumple la revolución política que se espera y se justifica de antemano. Respeta los regímenes provinciales y las investiduras legislativas y judiciales nacionales que han surgido de la violencia y de la corrupción abiertas. Legaliza así a la oligarquía, pretendiendo combatirla y superarla en los marcos de un régimen que aquélla estructuró a su imagen y semejanza.

Las consecuencias de esta legalización del régimen oligárquico son múltiples y de gran trascendencia. El nuevo gobierno revela, desde el comienzo mismo, su carácter contradictorio y vacilante. El ascenso de grupos sociales que encarama al radicalismo en el poder no halla una conducción política adecuada para un verdadero progreso democrático y social. La oligarquía, amenazada sin ser destruida, sigue encasillada en el Parlamento (especialmente el Senado), en el control de resortes fundamentales de la Administración, la justicia, las fuerzas armadas, la diplomacia, además de los que posee en la economía, la prensa, la educación y la manipulación cultural-ideológica. Desde estas bases obstaculiza y sabotea durante tres lustros, con eficacia y legalidad, todos los intentos progresistas de los gobiernos radicales, los ridiculiza y difama, mientras espera condiciones favorables para la restauración conservadora. El radicalismo debe gobernar con los instrumentos heredados de un Estado liberal que se estructuró en condiciones y para finalidades diferentes. Debe reemplazar la lucha por el compromiso. No puede cumplir la reparación integral prometida. Al frenarse el impulso ascendente de las masas y al claudicarse ante la oligarquía, se debilita a los elementos progresistas del radicalismo, fortaleciéndose automáticamente a sus sectores reaccionarios, que constituyen la correa de transmisión de la oligarquía desplazada y del imperialismo. El golpe de septiembre de 1930 que derribará al radicalismo del poder está ya ínsito en la frustración de 1916.

En paradoja sólo aparente, el triunfo replantea y acentúa la dialéctica de los conflictos que la composición policlasista y la organización movimientista del radicalismo y la prolongada lucha por el poder habían atenuado y enmascarado. Las contradicciones se refuerzan y entrelazan, a la vez, por las realizaciones y por los fracasos del radicalismo.

Los gobiernos radicales, que se suceden desde 1916 hasta 1930, implican el logro de una mayor democratización política y cambios cuantitativos en el funcionamiento del Estado. La voluntad popular, pese a las limitaciones derivadas de una estructura socioeconómica que se mantiene básicamente intacta, puede expresarse ahora con mayores garantías de autenticidad formal. El Estado es concebido en teoría como un ente metafísico, encarnación suprema del pueblo y de la nación, realizador de la idea ética. Sus funciones y proyecciones son ampliadas en considerable medida.

Al Estado se atribuye, ante todo, la función de mediador en los conflictos entre las clases y grupos nacionales, y entre éstos y el país con las grandes potencias y los inversores extranjeros. Opera además como instrumento para extender y consolidar la posición de las capas medias y para arrancar a la oligarquía y a los intereses foráneos, sin lucha frontal, por la presión y el compromiso, una mayor participación en los beneficios de la economía, de la sociedad y del poder. Todo ello implica naturalmente un mayor intervencionismo gubernamental en el juego de los intereses privados.

El arbitraje entre los grupos sociales se enlaza con el cumplimiento de una política redistributiva, posibilitada por la relativa prosperidad del periodo bélico y de la posguerra. Se legaliza el sindicalismo y se satisfacen algunas demandas obreras. La ocupación es incrementada y mantenida a través del aparato burocrático. Son extendidos los servicios públicos a cargo del Estado. El presupuesto fiscal sube en un 80 por 100 entre 1918 y 1923.

Se acentúa el sentido de defensa del patrimonio nacional, por lo menos en la parte ya comprendida dentro del sector público (petróleo, ferrocarriles), y se pretende una cierta regulación de los monopolios. A esta orientación responden los proyectos de creación de una marina mercante nacional (1916), de expropiación de buques de ultramar con matrícula argentina (1918) y de intervención estatal en el comercio exterior de cereales; proyectos todos que no prosperan en el Parlamento.

La política exterior se vuelve más independiente, incrementa su sentido nacional y su libertad de maniobra en las relaciones y negociaciones con las grandes potencias, como resultado de la base política ampliada y de la creciente rivalidad entre Gran Bretaña y Estados Unidos por el control del país. Hipólito Yrigoyen consigue mantener la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de las

fuertes presiones externas e internas para que Argentina intervenga en el conflicto. Ordena a los representantes diplomáticos el retiro de la Liga de Naciones, por no admitirse a Alemania ni reconocerse la igualdad de todos los países en la conducción del nuevo organismo. Hace alejar al país del sistema panamericano, y se niega en 1928 a firmar el Pacto Kellog. Despliega una firme actitud ante las imposiciones del imperialismo norteamericano y cierta simpatía hacia los países latinoamericanos agredidos por aquél. Intenta establecer relaciones comerciales con la Unión Soviética.

Juntamente con estos aspectos positivos, los gobiernos radicales mantienen básicamente intactas las estructuras socioeconómicas vigentes en el momento de llegar al poder. El sistema oligárquico-imperialista es respetado y perpetuado. El radicalismo, en cuya dirección y composición social los representantes de intereses agropecuarios tienen considerable peso, respeta la constelación configurada por la gran propiedad agraria, la producción ganadera y cerealera y el frigorífico dominado por capitales ingleses y norteamericanos. El presidente Yrigoyen resiste la sanción y la aplicación de la ley Contractual Agraria, que tiende a regular los contratos de arrendamientos rurales. Otros proyectos de legislación protectora de colonos y arrendatarios naufragan en el Senado. La resistencia a la penetración imperialista parece más dirigida contra Estados Unidos, en vías de intensificar su penetración en la Argentina (petróleo, automotores, industrias agropecuarias, comercialización), que hacia una Gran Bretaña secularmente implantada en el país. Las inversiones británicas evolucionan, de 1 860.7 millones de dólares en 1913 a 1 900 millones en 1918 y a 2 100 millones en 1926; las norteamericanas, de 40 millones a 100 y a 600 millones en iguales años, aumentando así dos veces y media en la guerra mundial y sextuplicándose en los ocho años siguientes. Ambas potencias, sus grupos inversores y su diplomacia, toleran a los gobiernos radicales en tanto éstos se presentan a la vez como expresión y como mecanismo de contención de las masas populares.

El respeto a la oligarquía y al imperialismo implica el mantenimiento de los factores tradicionales de subordinación, atraso y deformación, y la no creación de condiciones favorables para la acumulación nacional de capitales y su aplicación a una estrategia de desarrollo. El radicalismo adopta, de hecho, junto con una acción política de sesgo populista y redistribucionista, una línea económica liberal, que sigue colocando el énfasis en la producción agroexportadora y cuenta con los impuestos aduaneros como el recurso fiscal decisivo. Hacia la in-

dustria, sus actitudes y decisiones parece combinar la indiferencia y la hostilidad, reflejo de la participación e influencia reducida de la burguesía manufacturera en su liderazgo y en sus bases. Carece de política industrial. Terminada la guerra de 1914, el gobierno radical no intenta proteger las manufacturas expandidas como consecuencia del conflicto bélico, y presenta un proyecto de ley que reduce los derechos de importación para productos industriales (1918-1919). La economía nacional crece de modo lento e irregular, por acción de los factores determinantes y condicionantes de operación tradicional, externos e internos, sobre los que el gobierno radical no opera ni a los cuales pretende controlar.

El proceso de modernización cumplido bajo los gobiernos radicales se limita así a la extensión de la participación popular, sin que ésta resulte posibilitada y reforzada por un crecimiento independiente y autosostenido. El aumento de la participación, acompañado por una actitud redistribucionista generalizada, en condiciones de reducido crecimiento económico, replantea y agrava las tensiones y los conflictos de grupos que el radicalismo ha pretendido ignorar o superar bajo el signo de su pretensión integradora y totalizante. El problema de la distribución de un ingreso nacional que no crece al mismo tiempo que las clases y grupos, se manifiesta no sólo en el nivel social, sino también en el político, y tanto en la vida nacional global como en el seno del radicalismo. Evidencia clara de los límites que ese partido y su gobierno hallan rápidamente en su acción social y política es su actitud ante los movimientos reivindicativos del proletariado y del campesinado, estimulados por la crisis de posguerra. El arbitraje paternalista y las concesiones mínimas hacia esas clases coexisten con la represión terrorista (Semana Trágica, enero de 1919; matanzas de la Patagonia, 1919-1921).

La oligarquía se reagrupa después de la derrota de 1916 unificada y movilizada por una ideología coherente, por la pérdida de posiciones, por el daño a sus intereses y el odio a todo lo que el radicalismo representa, y no tarda en pasar a la acción. Ésta combina el ataque frontal y el sabotaje sistemático a la acción del gobierno, con una tarea de disgregación interna del partido oficial, facilitada por el proceso abierto en su seno. Los grupos políticos oligárquicos buscan a la vez unificar el frente opositor y atraerse a elementos afines del propio radicalismo. Los miembros de las clases superiores que se ubican entre los dirigentes y afiliados del radicalismo han visto colmadas sus aspiraciones con el triunfo electoral y con el control de altas posiciones

gubernativas y partidarias. Su intransigencia se debilita con la retirada estratégica de la oligarquía y sus maniobras envolventes. Las amenazas del movimiento obrero y campesino y de las nuevas tendencias ideológicas de avanzada fortalecen los lazos clasistas por encima de límites políticos que tienden a borrarse. El acuerdo entre las tendencias conservadoras de políticos oligárquicos y radicales se va creando de modo natural y casi imperceptible. Las capas medias radicales se satisfacen con el aumento de sus posibilidades de ingreso, prestigio y participación, y la conservación e incremento de lo ya logrado se vuelve su preocupación fundamental. Grupos altos y medios del radicalismo coinciden así en el deseo de mantener lo conquistado y las posiciones de preminencia frente a capas obreras y populares que se ubican en la maquinaria, las bases y las clientelas del radicalismo, presionan por una continuidad de la redistribución en el ingreso y en el poder y se ligan directamente a la figura carismática de Yrigoyen. La reacción de los grupos altos y medios del radicalismo contra la presión en parte potencial y en parte efectiva de las masas se focaliza en la hostilidad y la resistencia contra el caudillo. El partido termina por dividirse de hecho, con el surgimiento de la tendencia antipersonalista, encabezada por Marcelo T. de Alvear, que ocupa la segunda presidencia (1922-1928). Ésta adquiere un sesgo conservador liberal. Son un gabinete de hombres pertenecientes a la clase dominante tradicional o muy próximo a ella, Alvear trata de realizar un gobierno caracterizado por la administración ordenada y eficaz, la gestión y de su acción política: limitación estratégica empirismo de corto ma de clases e intereses particulares, encarnación y realización de la honesta, la legalidad constitucional, el equilibrio social y político, la política económica liberal, favorable a la oligarquía y a los capitales extranjeros. Una fase de prosperidad económica, en el plano mundial y en el nacional, favorece sus objetivos.

Al término del gobierno alvearista, Yrigoyen vuelve a la presidencia, con base en una popularidad incrementada que se manifiesta en un formidable apoyo electoral de masas (1928). Su segundo periodo es efímero. El país se ha ido transformando, al tiempo que nuevas situaciones críticas no tardan en hacer eclosión. Los volúmenes y los precios de las exportaciones argentinas se reducen, mientras aumentan los precios de las importaciones, reduciéndose la capacidad de compra del país. La contradicción entre la democratización política y las presiones distributivas y el lento crecimiento económico se acentúan más aún. La oligarquía no oculta ya su impaciencia ante esta situa-

ción y su irritación se transmite a las capas medias o es compartida espontáneamente por éstas.

En sentido contrario, ni el caudillo ni sus partidarios han aumentado su capacidad política para enfrentar nuevas y más críticas situaciones. Yrigoyen ha envejecido y ha intensificado el sentido autoritario y exclusivista de su conducción. La incapacidad, la desorganización y la anarquía se generalizan en la administración pública y en el partido. La ideología radical no se ha modificado, y su programa se ha renovado de modo harto insuficiente. Sigue siendo un partido que cree en su aptitud mágica de transformación por la sola presencia en el gobierno, y que pretende acaudillar y movilizar limitadamente a las masas populares, dentro de los marcos de un sistema tradicional y de un Estado liberal. Al tiempo que amenaza a los grupos dominantes, se gana su alarma y su odio, sin privarlos de poder para resistir y para contratacar. Las propias innovaciones progresistas que el radicalismo se propone introducir (nacionalización del petróleo y de otros recursos y servicios públicos; convenio comercial con la URSS) inquietan ya no sólo a la oligarquía, sino también a los grupos de intereses británicos y norteamericanos. El golpe decisivo proviene de la crisis mundial que estalla en 1929. Ésta da fin a la fase de prosperidad posbélica, afecta duramente a la economía argentina, revela sus limitaciones y la falta de aptitud partidaria y de mecanismos estatales para enfrentarla y superarla y agudiza las contradicciones sociales preexistentes. La oposición engloba ahora a la oligarquía, los intereses extranjeros, las capas medias, los intelectuales y estudiantes, los restantes partidos, la gran prensa, las fuerzas armadas. La ofensiva opositora desgasta al gobierno y al Partido Radical y termina por confundir y paralizar a las masas que aquéllos no se han preocupado de esclarecer, organizar ni movilizar. El 6 de septiembre de 1930, el golpe militar, encabezado por el general José F. Uriburu, termina casi sin lucha con el experimento político de las capas medias radicales y abre el segundo ciclo oligárquico que se prolonga hasta el advenimiento del régimen peronista.